

ta Capital, que los ha juzgado y sentenciado á la pena de muerte como salteadores, conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871, estimándose por los quejosos violadas en sus personas las garantías que otorga el artículo 16 de la Constitución general, por ser el nombramiento de dicha autoridad contra lo que dispone el artículo 47 de la Constitución particular del Estado, y el 104 del Reglamento económico político; infringiéndose ademas los artículos 41 y 109 de la citada Constitución.—Vistas las constancias de autos y considerando: que la base que ha servido á los quejosos para entablar el presente recurso, es la incompetencia del personal de la Jefatura política, por su nombramiento contra lo prevenido por la Constitución del Estado y sus leyes secundarias: cuya base está destruida por la ley de 6 de Noviembre de 1871, expedida por el Congreso de ese mismo Estado. Considerando: que los quejosos no niegan su calidad de salteadores y que la autoridad responsable de los actos reclamados ha obrado en la órbita de sus atribuciones, tanto al abocarse el conocimiento de esta causa como al ajustar sus procedimientos á la referida ley de 18 de Mayo de 1871, sin que sus actos importen violación alguna de las garantías aducidas por los quejosos en su petición de amparo. Por tales fundamentos y los propios y legales de la sentencia que se revisa, se decreta: es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Zacatecas pronunciada en 23 de Abril próximo pasado, que dice: la Justicia de la Union no protege ni ampara á Juan Montalvo, Pablo Aparicio y Crescencio Carrillo, por no haberse violado en sus personas la garantía que protege el artículo 16 de la Constitución general de la República, con los procedimientos del C. Gefe político de esta Capital que los juzgó conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871, como salteadores, condenándolos á la pena de muerte.

Devuélvase la actuación al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta

sentencia; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados—Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José María Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 25 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por el C. Plutarco Silva, contra el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por violación de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 3º suplente de Distrito.

No puedo ponerse en duda en vista de los fundados razonamientos que acaban de exponerse en el informe rendido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para justificarse de los calumniosos cargos que le dirige el C. Silva, en su escrito, que las funciones que ejerce ese respetable cuerpo, así como los demás poderes del Estado, son emanadas de una autoridad que en él representa legítimamente los intereses del pueblo.

Se pretende, sin embargo, que se hagan declaraciones contra esa legítima autoridad: que manden suspender sus actos, por mas pruebas que se den de la justicia para dictarlos; y por último, que se declaren soberanos sobre toda soberanía, los jueces de

Distrito, cuyas atribuciones han sido tan mal interpretadas por los que como el C. Plutarco Silva, buscan una constitucionalidad que se avenga á sus privados designios. Y esto no es de entenderse de otra manera, cuando en primer lugar, se intenta subvertir el régimen interior de un Estado, haciendo que un juez de Distrito conozca como jurado de acusacion á la vez que de sentencia; y en segundo, que se apoya en una ley que lo prohíbe dictar resoluciones que atacan el principio establecido en el artículo 40 del Código de la República.

De nada sirve por lo mismo que se invoque este Código, si para ponerlo en práctica hay que proceder contra su espíritu y su letra.

Se exige aquí al C. Silva, la responsabilidad que como Gefe político contrajo por haber excarcelado al reo Gregorio Villalobos, antes de que este cumpliera su condena, resulta averiguada aquella, y se impone un castigo. ¿Hay en esto violacion de garantías individuales? ¿Se atacan de alguna manera porque se procure por medio de la justicia, no dejar impunes los delitos? ¿A qué forma ó sistema de gobierno tratan de reducirnos los que así proclaman la Constitucion de la República y las leyes que de ella emanan?

Bien se deja traslucir que si para casos semejantes al de que nos ocupa el C. Silva, habia de entablarse un juicio de amparo, quedarían para siempre olvidados el derecho y la justicia, en cuyas sólidas bases descansan las sabias instituciones democráticas.

En el informe del Tribunal de Justicia se han desvanecido ya los conceptos de un modo satisfactorio, vertidos en contra de las autoridades del Estado, pero aun cuando no fuera así, bastaría echar una ojeada á las terminantes prevenciones de los artículos 2º y 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, para no volver jamas á ocurrir á los jueces de la Federacion en auxilio de ideas

que no son materia de controversia legal, ni menos de juicios de amparo.

Falta por lo tanto, causa para solicitarlo, y en esa virtud y por el tono incespetuoso en que se han conducido los solicitantes, debe imponérseles la pena necesaria, desechando de plano cualquiera gestion que en ese sentido se haga con el fin de que en lo sucesivo se respeten los actos de las autoridades legales constituidas.

Con apoyo, pues, de lo dispuesto en los artículos expresados, suplico al C. Juez, se sirva dictar su fallo en este negocio. Aguascalientes, Abril 18 de 1873.—*L. Ocañiz.*

Es copia que certifico. Aguascalientes, Abril 18 de 1873.—*Diego Ortigosa.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Aguascalientes, 3 de Mayo de 1873. Visto el presente juicio de amparo promovido por D. Plutarco Silva, comerciante, mayor de edad, y vecino de esta Capital, contra el Tribunal de Justicia del Estado, por violacion de garantías con la sentencia que lo condenó á inhabilitacion perpetua para desempeñar el cargo de Gefe político; visto el informe con justificacion dado en tiempo hábil por dicho Tribunal; lo pedido por la parte fiscal; la citacion para sentencia, y los dictámenes que para la resolucion definitiva de este negocio dió el Sr. Ascensor Lic. D. Joaquin del Peral, los cuales á la letra dicen: C. Juez de Distrito suplente.—D. Plutarco Silva vecino y originario de esta Capital, comerciante y mayor de edad, se presentó á ese juzgado de Distrito el 24 de Marzo próximo pasado, pidiendo la proteccion y amparo de la Justicia de la union, contra una sentencia del Supremo Tribunal de Justicia, confirmando la de primera instancia; por la cual fué condenado á inhabilitacion perpetua para desempeñar el cargo de Gefe político, por el abuso que en su ejercicio cometió excarcelando á un reo que cumplia su condena de obras públicas, y

apoyando su instancia en la inconstitucionalidad de las autoridades todas del Estado.

El Supremo Tribunal de Justicia de un Estado soberano, es uno de los supremos poderes en quien nuestro sistema de gobierno deposita la administracion todopoderosa de la justicia; es por lo mismo como en todos los paises civilizados, el poder regulador de los derechos del hombre "base y objeto de las instituciones sociales, y sus fallos, no pueden, no deben estar subalternados al juicio privado del primer ciudadano que cree violadas sus garantías, por las consecuencias legales de una sentencia.

Estas altas consideraciones, entre otras sin duda, tuvo presente el Legislador para exceptuar los negocios judiciales del tan benéfico cuanto liberal recurso de implorar el amparo de la justicia de la Union, cuando han sido violadas las garantías que se otorgan á los derechos del hombre en sociedad, art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Tengo la conviccion, que las sentencias pronunciadas por el Supremo Tribunal de Justicia de un Estado, que forma parte de la confederacion, en un proceso formado segun sus leyes reglamentarias para su régimen interior, es un negocio judicial; y que no siendo admisible el recurso de amparo en negocios de esta calidad, la Justicia de la Union desde la primera instancia puede repeler tal recurso, como se repelen de oficio los notoriamente imprecidentes, y aun los que no se entablan en la forma debida. Consecuente con esa doctrina, sería una engañosa presuncion tratar de comentar siquiera, el tan bien redactado cuanto luminoso informe que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado ha dado, sobre el recurso entablado por el Sr. Silva, y al cual adjuntó en justificacion, documentos oficiales, pasados en autoridad de cosa juzgada.

En virtud de lo expuesto, y teniendo en muy especial consideracion el decoro debido al Supremo Tribunal de Justicia y so-

TOMO IV.—PARTE II.

bre todo, á la respetable veracidad de su informe, soy de opinion, que vd. juzgando definitivamente de conformidad con el pedimento fiscal, falle con las siguientes proposiciones: Primera: no es de admitirse ni se admite el presente recurso; en consecuencia, la Justicia de la Union no ampara ni protege la queja de D. Plutarco Silva en la presente instancia. Segunda: publíquese en el periódico oficial esta sentencia con inclusion de este dictámen. Tercera: no se impone al Sr. Silva la multa proveniente por el art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, por considerar esa facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. Cuarta: notifíquese esta sentencia al C. Promotor fiscal y á D. Plutarco Silva, y sin otra citacion remítanse originales los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.—Aguascalientes, Abril treinta de mil ochocientos setenta y tres.—Lic. Joaquín del Peral.

C. Juez de Distrito Suplente. El art. 5º de la Constitucion de la República previene, que nadie puede ser obligado á prestar servicios personales, sin la justa retribucion y sin su pleno consentimiento. En virtud, pues, de este precepto constitucional, puede vd. agregar una 5ª proposicion de la sentencia, condenando á la parte del Sr. Silva á pagar las costas y honorarios devengados por el Asesor.—Aguascalientes Mayo 1º de 1873.—Peral.

De conformidad con lo consultado en dichos dictámenes, el Juez que suscribe falla con las mismas proposiciones que contienen, declarando; Primera: que no es de admitirse, ni se admite el presente recurso; en consecuencia, la Justicia de la Union no ampara ni pretege la queja de D. Plutarco Silva. Segunda: de conformidad con el art. 5º de la Constitucion de la República que previene que nadie puede ser obligado á prestar trabajos personales sin la justa retribucion, se condena al expresado Silva á pagar las costas y honorarios devengados por el Asesor en este juicio. Tercera: No

se impone al Sr. Silva la multa prevenida por el art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, por considerar esa facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. Cuarto: Notifíquese esta sentencia al C. Promotor fiscal y á D. Plutarco Silva, y estando insertos en ella los dictámenes en que se apoya, sáquense las copias para su publicacion en los periódicos, y sin nueva citacion, remítanse los autos á la Suprema Corte para su revision.

El Sr. D. Antonio Morfin tercer Juez suplente de Distrito, así lo decretó y firmó: doy fé.—*Antonio Morfin.*—*Silverio Arteaga.*

Es copia que certifico. Aguascalientes, 12 de Mayo de 1873.—*Silverio Arteaga,* secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 30 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por D. Plutarco Silva, contra el Tribunal Superior de Justicia del Estado que lo juzgó y declaró responsable por la excarcelacion de Gregorio Villalobos, condenándolo á inhabilidad perpetua de volver á desempeñar algun empleo, con cuyo acto creó el quejoso vulneradas en su persona las garantías á que se refiere el artículo 22 de la Constitucion federal: vista la sentencia pronunciada respecto de este juicio, por el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, en la que entre otras cosas, además de negarse el amparo, se condena á Silva á pagar las costas y honorarios del Asesor, segun la consulta de este; y Considerando: que el Tribunal de Justicia de Aguascalientes, ha procedido dentro de la órbita de sus facultades, sin vulnerar ninguna garantía personal; y que Silva ha procedido sin fundamento alguno digno de atencion, solicitando amparo; de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitucion federal y en el 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que se reforma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el tres del actual, por el Juez de Distrito de Aguascalientes, y se declara:—1º: Que la Justicia de la Union, no ampara ni protege á D. Plutarco Silva contra el acto que reclama.—2º: Se revoca dicha sentencia en la parte que condena á Silva al pago de las costas y honorarios del Asesor.—3º: Se condena á Silva al pago de una multa de cien pesos.—4º: Lo acordado respecto del Asesor.—5º: Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos respecto de los puntos primero, segundo, cuarto y quinto, y por mayoría respecto del tercero, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 11 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.